

Nuevos Modelos Institucionales para la Gestión Ambiental Urbana

Asociaciones Multisectoriales para el Uso Sustentable del Agua en Áreas Urbanas

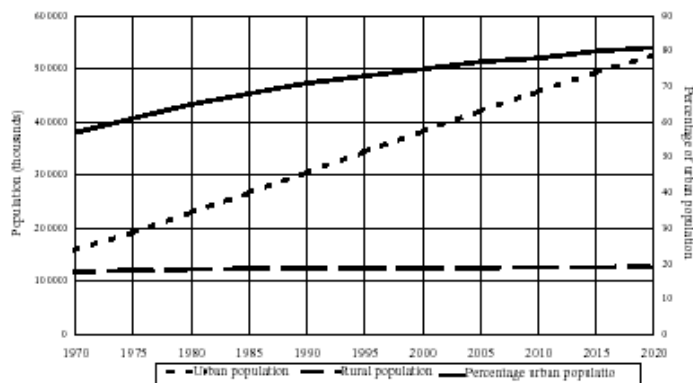
Introducción

El milenio que acaba de iniciarse puede parecer no tan nuevo para muchos, en particular, debido a que la lista de desafíos que se vienen planteando para el largo plazo –problemas ambientales, pobreza, desigualdad, transparencia– se está volviendo cada vez más larga. De conformidad con los propósitos establecidos en el objetivo 7 de las Metas de Desarrollo del Milenio, “*mejorar la sustentabilidad ambiental*”, la convocatoria 2003 del Programa de Pequeños Fondos Competitivos para Investigación del SEMA, se centrará en *el uso sustentable del agua en las áreas urbanas*.

Al finalizar el siglo XX en América Latina, el 75% de su población total vivía en ciudades. Mientras que al comienzo del siglo una de cada cuatro personas vivía en centros urbanos, al inicio del siglo XXI, la relación se ha triplicado. El proceso de urbanización no sólo se expresa a través del crecimiento demográfico sino que también muestra su dimensión económica, donde las ciudades generan el 80% del crecimiento económico a nivel regional (CEPAL, 2000). Sin embargo, tal dinamismo viene aparejando un alarmante crecimiento de la pobreza urbana. La medición de la línea de pobreza que hace CEPAL (CEPAL 1999 y 2000) muestra que a finales de los noventa, seis de cada diez personas pobres en América Latina vivían en zonas urbanas. América Latina es la región en desarrollo que provee el ejemplo más claro del proceso mundial que se conoce con el nombre de “urbanización de la pobreza”. Si bien los niveles de pobreza urbana varían de un país a otro, la pobreza por lo general es más extendida en las ciudades secundarias que en las áreas metropolitanas (idem).

Figura 1

AMÉRICA LATINA: TENDENCIAS EN LA POBLACIÓN URBANA Y RURAL
Y GRADO DE URBANIZACIÓN, 1970 - 2020



Fuente: ECLAC, Population Division - Latin American and Caribbean Demographic Centre (CELADE), *Latin America: Urban and Rural Population Projections, 1970-2025*, Demographic Bulletin, year 32, No. 63 (LC/G.2052; LC/DEM/G.183), Santiago, Chile, January 1999.

La continua concentración de millones de pobres en centros urbanos de toda la región es más que una simple cuestión demográfica. Se trata de un proceso de gran sensibilidad que está teniendo como consecuencia una transformación radical de la estructura de las ciudades, acompañado de cambios complejos en materia social, económica, cultural y ambiental. Uno de los procesos más visibles que expresan los actuales cambios en la estructura urbana es el desplazamiento de poblaciones de bajos ingresos desde las áreas centrales a la periferia de la ciudad, así como la permanente migración de las zonas rurales a las urbanas ([ver figura 1](#)). Esta ubicación periférica permite a las poblaciones pobres encontrar terrenos más baratos para su vivienda u (lo que se ha constituido en la tendencia actual en las ciudades latinoamericanas) ocupar terrenos ilegalmente, contribuyendo al crecimiento de los ya muy conocidos asentamientos irregulares.

La segregación socio-espacial es una característica muy pronunciada y negativa de las ciudades de la región: los hogares pobres siguen siendo empujados hacia la periferia y/o zonas de alto riesgo, con condiciones de vivienda precaria y graves carencias en materia de servicios ambientales urbanos. Esto genera no sólo el abandono de zonas centrales que ya cuentan con infraestructura y servicios urbanos, sino también la necesidad de proveer o ampliar redes de infraestructura y servicios a estas zonas.

Este patrón de urbanización ha significado un peso enorme a los gobiernos locales en lo que refiere a satisfacer las necesidades básicas de los ciudadanos. Los problemas ambientales urbanos tales como acceso insuficiente o inadecuado a servicios de agua y/o saneamiento, manejo inadecuado de residuos y sistemas de energía no sustentables se vuelven agudos y demuestran que, si bien se reconoce la sustentabilidad como tema relevante en todo el mundo, las políticas y prácticas de desarrollo urbano, tanto en países desarrollados como en aquellos en proceso de desarrollo, todavía se encuentran lejos de incorporar la sustentabilidad dentro de su planificación. En los países desarrollados esto se hace más evidente en la continua expansión de las ciudades y el constante crecimiento en el uso de automóviles particulares y la demanda de combustibles fósiles. La permanente falta de infraestructura sanitaria básica, el acceso inadecuado al agua potable y el agravamiento de la pobreza y exclusión social como lo evidencian el constante crecimiento de asentamientos irregulares y barriadas pobres urbanas, constituyen los principales indicadores de un patrón de urbanización no sustentable en el mundo en desarrollo (Allen et al, 2002).

Dentro de este contexto las ciudades son cada vez más reconocidas como parte del problema y rara vez como parte de la solución. Aún persiste un sesgo anti-urbano al pensar y elaborar políticas ambientales. Sin embargo, en un mundo en constante y rápida urbanización, estos debates pasan a ser teóricos o meramente irrelevantes. El grueso de la actividad humana y su impacto en el medio ambiente dependerán cada vez más de cómo las ciudades, sus sectores empresariales público y privado y los miembros de la sociedad civil manejen los asuntos sociales, económicos, ambientales y culturales. La urbanización sustentable, como proceso dinámico y multi-dimensional, involucra todas estas cuestiones así como también la esencial dimensión político-institucional de la gestión urbana. Más aún, destaca la importancia de temas transversales como la pobreza, la desigualdad de género y exclusión social, recalcando las

razones por las cuales la gestión del medio ambiente urbano constituye un asunto clave y crucial de la gobernabilidad local.

Los temas relativos a la gobernabilidad ambiental local han sido analizados y discutidos en diferentes foros organizados por el SEMA. En el año 2001, las notas concluyentes del Foro Internacional sobre Gestión del Desarrollo Urbano Sustentable en América Latina y el Caribe, expresaban la necesidad urgente de apoyo técnico para la formulación de planes de desarrollo sustentable conducentes a combatir la pobreza urbana y la degradación ambiental, conservar los recursos naturales, mejorar las condiciones de vida en zonas urbanas y dirigir el suministro de los servicios más básicos para optimizar los recursos humanos y económicos. (Ver <http://www.ems-sema.org/frolac/>).

En junio del 2002, alcaldes e intendentes canadienses, italianos y latinoamericanos discutieron acerca del papel del sector privado en el suministro de agua y servicios de saneamiento durante la sesión de “Repensando la Ciudad” de la Conferencia de Montreal 2002, en Montreal, Canadá. (Ver <http://www.ems-sema.org/eventos/montreal/>).

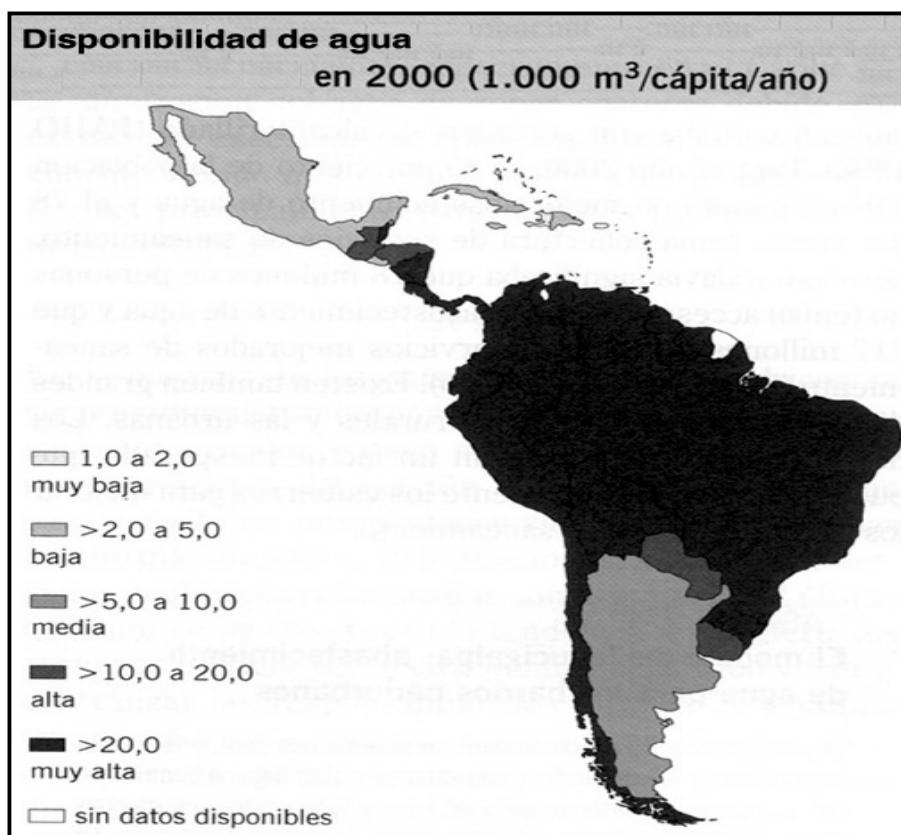
En marzo de 2003, el SEMA participó en el Seminario: *Europa y América Latina: La Gestión de los Servicios de Utilidad Pública en áreas metropolitanas de América Latina*, como parte de las actividades de la Reunión Anual 2003 de BID-CII en Milán, Italia. (Ver <http://www.ems-sema.org/eventos/0303bid/index.htm>).

Agua: desafíos mundiales y locales en las ciudades latinoamericanas y caribeñas

El año 2003 ha sido declarado por las Naciones Unidas como Año Internacional del Agua Dulce, con el objetivo de aumentar la conciencia pública mundial con respecto a temas relativos al agua dulce y ganar compromiso político para la puesta en marcha de políticas que aseguren un uso más sustentable y equitativo del agua.

Tal como fuera informado en el año 2001 por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), la población mundial se ha triplicado en 70 años mientras que el uso de agua ha aumentado seis veces. Dentro de los próximos 25 años, un tercio de la población mundial experimentará severa escasez de agua. En el momento actual, más de mil millones de personas carecen de acceso al agua potable, tres mil millones de personas carecen de acceso a sistemas de saneamiento básico. Más del noventa por ciento de las aguas residuales en países en desarrollo regresa a la tierra o al mar sin tratamiento alguno (Brooks, 2002).

Según el Informe de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos en el Mundo, del año 2003, América Latina y el Caribe cuentan con aproximadamente el 26% de los recursos mundiales accesibles de agua dulce y, por lo tanto, tienen su cuota de responsabilidad en la puesta en marcha de políticas para salvaguardar un recurso cada vez más escaso. En este sentido, mientras que la región muestra un porcentaje relativamente alto de viviendas conectadas a redes de agua potable, (promedio total de 85%) y cobertura de saneamiento (promedio total 78%), la gran mayoría de los sistemas de saneamiento descargan en los cuerpos de agua sin ningún tipo de tratamiento (OMS, 2000). La Organización Mundial de la Salud estima que sólo el 14% del agua residual es tratada eficientemente antes de su descarga.



Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente – PNUMA

La generalizada escasez de agua, la destrucción gradual y la contaminación de recursos de aguas superficiales y subterráneas amenazan el abastecimiento mundial de agua dulce. Mientras tanto, los enfoques sectoriales tradicionales con respecto a la gestión de agua dulce están siendo cuestionados, impulsando a la sociedad a adoptar nuevos enfoques que garanticen un uso sustentable de los recursos hídricos, a través de un abordaje integrado y multisectorial de su planificación y gestión.

Se deberán realizar reformas sustanciales en el sector hídrico si se desean lograr las Metas de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas, en particular aquellas establecidas en el objetivo número 7:

- Hacia el año 2015, reducir a la mitad el porcentaje de personas que no tienen acceso o no cuentan con recursos económicos para obtener agua potable; y
- Detener la explotación no sustentable de recursos hídricos, desarrollando estrategias de gestión del agua en el ámbito regional, nacional y local, que promuevan tanto un acceso equitativo como un suministro adecuado de agua.

Más allá de las estadísticas, existe el problema crucial de las desigualdades generadas por una disponibilidad de agua que no es pareja. El manejo de estas disparidades constituye el

fundamento de cualquier estrategia sustentable para abordar los desafíos que plantea el agua y esto implica no sólo decisiones técnicas sino fundamentalmente la respuesta a cuestiones éticas y políticas, algunas de ellas resumidas por D. Brooks (2002):

- ◆ ¿Quién debe recibir y cuánto?
- ◆ ¿A qué costo y a qué precio si lo hubiera?
- ◆ ¿Cómo abordar la entrega de un servicio de costo adecuado a una población pobre?
- ◆ ¿Quién decide y a través de qué procesos?
- ◆ ¿Qué características de la gobernabilidad tendrán más probabilidad de generar decisiones de gestión que sean justas, efectivas y ambientalmente sustentables?

Las mejores respuestas muchas veces incluyen, la aplicación de buena tecnología, en parte arraigada en el conocimiento tradicional heredado y practicado por hombres y mujeres en el seno de sus propias comunidades y en el transcurso de generaciones, muchas veces inspirada por la innovación científica y las nuevas ideas.

Se debe prestar atención especial al papel de las mujeres en la gestión del agua. Por ejemplo, estudios de UNICEF en Honduras revelan que las mujeres y los niños son quienes acarrear el agua a los hogares. Esta acción se repite entre 3 y 12 veces por día. Son raras las ocasiones en que los hombres realizan esta tarea. También son las mujeres quienes hierven el agua para prevenir enfermedades y epidemias en sus familias. Más aún, debemos tener en cuenta lo que investigaciones recientes han planteado con respecto a que la mujer está más dispuesta a emprender acciones ambientales dentro de las comunidades locales.

Sólo mediante procesos de buena gobernabilidad podrán resolverse las problemáticas relativas a una gestión justa, efectiva y ambientalmente sensible. Al final, el manejo de agua dulce, que es escasa, exige el desarrollo de instituciones que sean abiertas, bien informadas, participativas y responsables (idem).

La problemática del agua en las áreas urbanas

“Cuando se carece de infraestructura y servicios, las zonas urbanas carentes de infraestructuras de agua se ubican entre los ambientes mundiales que más amenazan la vida”. Informe de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos en el Mundo (2003).

El informe 2003 de las Naciones Unidas reconoce que el rápido aumento del consumo de agua y la contaminación urbana (aguas residuales) se encuentran entre las principales amenazas a la integridad de los sistemas de agua superficial y subterránea. Más aún, en los asentamientos irregulares, la falta de acceso al agua potable y el saneamiento inadecuado también plantean serias amenazas a la salud humana. El suministro de agua potable y la conexión a sistemas de saneamiento varían geográficamente de país en país y también según los niveles de ingreso económico. Se ha estimado que las zonas donde se registran ingresos más altos cuentan con cuatro veces la cobertura de estos servicios en comparación con aquellos vecindarios de bajos ingresos. Esto significa que las comunidades marginadas y los barrios más pobres, por lo

general, están expuestos a mayores riesgos de salud vinculados al agua (Banco Mundial, 1997).

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la inversión mundial estimada que se necesitaría para alcanzar niveles adecuados de infraestructura de agua potable y saneamiento sería de 23 mil millones de dólares americanos por año, en tanto que la inversión actual alcanza los 16 mil millones de dólares americanos. Esto nos lleva a otra serie de preguntas que también deben ser abordadas por una estrategia de gestión sustentable del agua:

- ◆ ¿Cómo harán las sociedades para zanjar la brecha de inversión existente?
- ◆ ¿A través de qué mecanismos y arreglos?
- ◆ ¿De dónde van a provenir los recursos (financieros, administrativos, etc.)?

La evaluación (2000) de la Organización Mundial de la Salud indica que se ha logrado un avance en la ampliación de redes de distribución de agua potable en los últimos treinta años en la región: de un 70% de los hogares en el período de los años 70 a aproximadamente un 85% en el 2000.

Sin embargo, la cobertura en el suministro de agua para zonas urbanas ha disminuido en el transcurso de la última década debido al rápido crecimiento de la población urbana.

Con respecto a los hogares que cuentan con sistemas de saneamiento, el informe de la OMS indica que la cobertura se ha ampliado de 36% en los años 70 al 78% en el 2000. A pesar de los avances en la cobertura de saneamiento, el hecho crucial es que la gran mayoría de estos sistemas descargan lo colectado en cuerpos hídricos sin que haya ningún tipo de tratamiento previo. De hecho, el informe de la OMS estima que tan sólo un porcentaje del 14% del agua residual es efectivamente tratado antes de su descarga. En la mayoría de los casos, la forma principal de tratamiento consiste únicamente en tratamiento primario, es decir, la remoción de sólidos en suspensión del agua que se coloca en tanques de depósito.

Estructuras de gobernabilidad local para el uso sustentable del agua **Asociaciones multi-sectoriales**

La pobreza urbana, la exclusión social, las inequidades de género y la degradación ambiental, plantean desafíos adicionales a los gobiernos de las ciudades: además de la presión en busca de una respuesta a la creciente demanda de servicios ambientales urbanos, a los gobiernos municipales también se les solicita implementar políticas públicas locales que aborden la situación social y ambiental de vulnerabilidad en la que viven grandes sectores de la población.

La experiencia demuestra, sin embargo, que los municipios por sí solos no pueden hacer frente a las continuas y crecientes demandas de los ciudadanos. La tendencia global hacia una descentralización política y económica ha colocado a los municipios en el primer plano dentro de la crisis de los servicios urbanos. Algunos municipios, debido a su tamaño e importancia política, se encuentran bien posicionados para atender los desafíos en cuanto a provisión de agua potable, saneamiento, servicios de recolección de residuos y suministro de energía. La

gran mayoría de los municipios, sin embargo, no está preparada para resolver sus crecientes problemas.

Durante las últimas décadas, gran parte de los países de la región ha puesto en marcha procesos de descentralización dentro del marco de las políticas de ajuste estructural, transfiriendo autoridad política, administrativa y de planificación del gobierno central al local. Si bien reciben más poder con tal transferencia de potestades, por lo general, los municipios carecen de la experiencia y capacidad de gestión necesarias para abordar esas cuestiones. Tampoco se encuentran en una posición que les permita disponer de recursos financieros y monetarios: autoridad descentralizada no ha significado descentralización de presupuestos nacionales, por lo tanto, los municipios acaban teniendo mandatos de gobernabilidad más amplios pero con menores recursos financieros. (PPPUE, 2000).

Durante el mismo período y también como parte de las políticas de ajuste y reforma del estado, muchos países en desarrollo se apartaron de la provisión de servicios urbanos a través del sector público. Este cambio muy a menudo ha tomado la forma de privatización en gran escala, mediante lo cual el gobierno cede la propiedad y control del servicio y sus consecuentes activos a una organización privada, ya sea a través de una venta directa o mediante una concesión a largo plazo. Sin embargo, es importante subrayar que la privatización a gran escala no es más que una de múltiples formas en que el sector privado participa en el suministro de servicios ambientales urbanos. Existen diferentes modalidades de involucramiento del sector privado, como por ejemplo: joint ventures (asociaciones de capital mixto), contratos de construcción-operación-transferencia (BOT), concesiones y muchas más.

La privatización ha demostrado ciertas limitaciones con respecto a la provisión de servicios ambientales en países en desarrollo: un aspecto clave es que los gobiernos, por lo general, no siguen estando directamente involucrados en el suministro de servicios públicos básicos (PPPUE, 2000). Esto parece ser un tema crucial en virtud de la sustentabilidad de una estrategia de asociación: los gobiernos locales deberían ser capaces de adquirir destrezas y conocimiento durante el proceso, de modo de estar en posición y condiciones de operar el sistema al finalizar el contrato si así fuera el caso, sin haber debilitado la capacidad de las autoridades públicas.

El ejercicio de la privatización como política de reforma única y central, podría limitar las opciones disponibles a los gobiernos y la sociedad civil para innovar y tratar de poner en práctica mejores arreglos de carácter participativo. Un ejemplo de arreglos participativos dentro del marco de la participación del sector privado puede ser el caso del Gran Buenos Aires, donde el Gobierno otorgó un contrato de concesión por 30 años para el suministro de agua y servicios de saneamiento para el Gran Buenos Aires a Aguas Argentinas (AA), un operador privado, con el requisito de ofrecer servicios a zonas de bajos ingresos y lograr un objetivo del 100% de cobertura (Hardoy A., et al, 2000). En 1996, AA creó el Programa para Asentamientos de Bajos Ingresos dentro de un nuevo enfoque en el cual la comunidad proporcionaba los recursos en forma de mano de obra y participación; el gobierno local proporcionaba la autoridad y los recursos financieros; AA proveía los recursos financieros, capacidad técnica y equipamiento y las ONGs facilitaban los vínculos entre los actores así como la capacidad organizativa.

Algunos resultados del Programa muestran el impacto positivo de este arreglo multisectorial: para el año 1998, la cobertura del servicio de AA había aumentado a 7.9 millones de personas, comparada con los 6.4 millones que atendía en 1993, de los cuales 550.000 eran residentes en asentamientos irregulares, en contraposición a los 200.000 registrados en 1993 (idem).

El enfoque participativo del Programa enfrenta limitaciones relativas a las diferencias entre los variados intereses de sus asociados: el interés de AA en controlar los costos de la inversión y los intereses de la comunidad en cuanto a su capacidad de pago del servicio; diferencia en materia de tiempos: para los políticos los tiempos de elecciones y para los residentes sus necesidades inmediatas. La falta de coordinación generada por estas diferencias sólo puede acomodarse parcialmente con la facilitación de las ONGs. Otra dificultad la constituye la replicabilidad de las experiencias: se han realizado proyectos en varios asentamientos irregulares con resultados positivos, sin embargo, aún no se ha implementado una metodología de trabajo para ampliar los servicios a escala significativa (idem).

Sin embargo, a pesar de los obstáculos, la experiencia muestra que dentro del enfoque de involucrar al sector privado en la provisión de agua a los sectores urbanos pobres, existen oportunidades de crear redes y alianzas multisectoriales y, más aún, que estos arreglos podrían llevar a situaciones en las que todos los sectores involucrados tengan algo que ganar.

Las estructuras de gestión participativa deberían asegurar que en cualquier tipo de proceso de reforma, el acceso a los servicios de agua debe estar disponible a todos los sectores de la sociedad, especialmente a los habitantes urbanos pobres, y así el propio proceso será transparente e involucrará a todos los interesados. El sector privado desempeña un papel que no puede ser negado. No obstante, donde hay falta de información, participación y procesos democráticos, la situación queda expuesta a conductas oportunistas del sector privado (Gutiérrez et al, 2003).

Una política que promueva e institucionalice los ámbitos de participación multisectorial para la gestión sustentable de los servicios de agua, debe fomentar un proceso de toma de decisión que sea participativo y, en particular, debe tratar a los pobres como participantes activos y no como meros receptores. Este enfoque ha sido adoptado por la Municipalidad de Villa María del Triunfo, un asentamiento pobre en la periferia de Lima, tal como lo demuestra la investigación apoyada por el Secretariado de Manejo del Medio Ambiente del IDRC (SEMA/IDRC). El área fue una de las receptoras del proyecto "Agua potable para pueblos jóvenes" (APPJ). El proyecto consistió en el suministro de agua potable a familias que viven en asentamientos marginados e implicó la instalación de reservorios de agua de 50 m³ y una red de cañerías conectadas a "pilones públicos" por cada 8 a 10 hogares, o sea atendiendo a un total de 120 familias. Los componentes del sistema se arman con mano de obra voluntaria de la propia comunidad. Las comunidades además se involucran activamente en el manejo general del sistema, a través de su participación en el Comité de Vigilancia del Agua Potable (COVAAP), que constituye una combinación de micro-empresa público-privada autorizada a gestionar todo el sistema incluyendo la compra de agua de camiones cisterna, su distribución, fijación del precio del agua y mantenimiento del sistema.

Los principales resultados del proyecto APPJ son: puesta en marcha de 250 sistemas que proveen de agua potable a más de 53.000 hogares, representando más de 330.000 habitantes

de Lima; el suministro ininterrumpido de agua de calidad mediante el uso de mano de obra local y tecnología apropiada; los ingresos por la venta de agua se reinvierten en un fondo de agua y en esfuerzos por combatir la pobreza; mayor conciencia y cambio positivo de conducta en los residentes con respecto a la conservación del agua; generación de liderazgo e iniciativa locales (por mayor información: <http://www.ems-sema.org/castellano/proyectos/solidaria/ppp/index.html>)

La mayor parte de las experiencias y “mejores prácticas” destacadas en la literatura reciente sobre gestión de servicios ambientales urbanos señalan la necesidad de dotar a las autoridades locales de más autonomía y flexibilidad en la toma de decisiones, para permitirles liderar la institucionalización de las alianzas multi-sectoriales para la gestión sustentable de los servicios ambientales urbanos. La dimensión “institucional” emerge como un aspecto esencial en la promoción de un cambio cultural e institucional en la praxis de planificación y gestión de los gobiernos locales. Se deben institucionalizar espacios innovadores para la participación social y la toma de decisiones.

En el establecimiento de estas nuevas “institucionalidades” aparece un nuevo papel para el sector de la investigación. A pesar de la ampliamente aceptada noción de que la investigación puede aumentar la capacidad de las autoridades locales para planificar, gestionar y anticipar cuestiones y problemas emergentes –por lo tanto, preparar enfoques de gestión para enfrentarlos—no existe una cultura extendida de usar la investigación de manera constructiva como una dimensión importantísima en las actividades de elaboración de políticas públicas y, más aún, en algunas ocasiones existe un cierto grado de sospecha con respecto a su posible contribución (Kitchen, 1997). A menudo, las autoridades locales cuentan con estructuras y especialistas profesionales adeptos a definir los problemas y soluciones de acuerdo con sus propias experiencias y capacidad resolutoria. Quizá no sean tan proclives a transferir a sus comunidades locales la responsabilidad por la toma de decisiones, o de establecer marcos participativos para esta toma de decisión, ni tampoco coordinar el tipo de respuestas holísticas en materia de políticas, como se requiere para asegurar un “desarrollo sustentable”.

No obstante, como afirman Kelly & Moles (2002) –sobre la base de una serie de estudios sobre el proceso de la Agenda Local 21 en diferentes ciudades—a través del fortalecimiento de relaciones y del establecimiento de confianza entre los diferentes sectores de la sociedad, se pueden construir estructuras organizacionales tentativas que permitan la colaboración de actores múltiples en la definición de objetivos sustentables en términos que puedan ser comprendidos por todos. Para ser exitosas, tanto la gobernabilidad como la investigación requieren de un sentido de alerta con respecto a las estructuras sociales, culturales y políticas de una comunidad –incluyendo muy en particular sus estructuras de poder (Brooks, 2002).

El desafío de la gestión ambiental urbana se mueve entonces hacia la implementación efectiva de estas nuevas “institucionalidades” que garantizan una participación social amplia en la planificación y gestión de las políticas ambientales urbanas, a mediano y largo plazo. Es dentro de este marco que el SEMA está promoviendo un nuevo enfoque que facilite la “institucionalización de una cultura multi-sectorial” a nivel local. Esperamos promover investigaciones que institucionalicen prácticas e instrumentos que establezcan derechos y responsabilidades para todos los actores y sectores involucrados. Es de esperar que los resultados de los proyectos financiados ilustren sobre nuevos enfoques institucionales, quizás promuevan nuevas soluciones prácticas y abran debates teóricos genuinos.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- Allen, A., and You, N. (2002): "Sustainable Urbanisation: bridging the green and brown agendas". The Development Planning Unit. University College London. United Kingdom. 2002.
- Bennett, E., Grohmann, P. and James S., 2000: "Joint Venture Public-Private Partnerships for Urban Environmental Services". Report on UNDP/PPPUE's Project Development Facility (PDF) (1995 –1999). PPPUE Working Paper Series Volume II. UNDP/PPPUE New York, 2000. (<http://www.undp.org/pppue/gln/publications>)
- Brooks, D. (2002): "WATER: Local-level Management". International Development Research Centre. Ottawa, Canadá
- Burone, F., Savio, R., (2001): "Managing Sustainable Urban Development in Latin America and Caribbean. The contribution of Knowledge Networks". Background Document to the International Forum on Managing sustainable Urban Development in Latin America and Caribbean. Montevideo, Uruguay. 2001
- CEPAL (2000): "De la Urbanización acelerada a la consolidación de los asentamientos humanos en América Latina y el Caribe: el espacio regional". Santiago, Naciones Unidas, Comisión Económica para América Latina y el Caribe y Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos.
- ECLAC (2000) "Equity, development and citizenship" (LC/G.2071(SES.28/3)), Santiago, Chile.
- ECLAC (1999) "*Social Panorama of Latin America*" (LC/G.2050-P), Santiago, Chile.
- Gutierrez, E., Calaguas, B., Green, J., Roaf, V. (2003): "New Rules, New Roles: Does Private Sector Participation benefit the poor ?" WaterAid and Tearfund Report (http://www.wateraid.org.uk/site/in_depth/current_research/)
- Hardoy A. and Schusterman R. (2000) "New models for the privatization of Water and Sanitation for the Urban Poor" in Environment & Urbanisation, Vol. 12 N° 2, October 2000.
- Harvold, K., (2002): "Consensus or Conflict ? Experiences with Local Agenda 21 Forums". Paper to ECPR Joint Sessions of Workshops, Turín, 22-27 March 2002. Workshop 6 Institutional Innovation in Local Democracy.
- Kelly R., and Moles R., (2002): "The development of Local Agenda 21 in the Mid-west region or Ireland: A case study in interactive Research and Indicator Development" in Journal of Environmental Planning and Management. Vol. 45 Issue 6, November 2002.
- Kitchen, T. & Whitney, D. (1997): " Local Authority/Academic Collaboration And Local Agenda 21 Policy Processes" in Journal of Environmental Planning & Management, Vol. 40, Issue 5.

-
- Rojas, Eduardo (2003): "EL financiamiento de Infraestructuras urbanas en América Latina y el Caribe. El papel de los gobiernos Locales". Documento presentado al Seminario Europa y América Latina La gestión de los servicios de utilidad pública en las areas metropolitanas de América Latina". Milán, Italia. Marzo, 2003
- The World Bank (1997): "Directions in Development: Wastewater Treatment in Latin America, Old and New Options". The World Bank, Washington D.C.
- United Nations, (2003). Water for People, Water for Life-United Nations World Water Development Report. Co-published with Berghahn Books, U.K.
<http://www.unesco.org/water/wwap/wwdr/>
- Wacker C., Viaro A., and Wolf M. (1999): "Partnership for Urban Environmental Management: the roles of urban authorities, researchers and civil society" in: Environment & Urbanization, Vol 11, No 2, October 1999.
- World Health Organization (WHO), 2000. "Global Water Supply and Sanitation Assessment 2000 Report".
http://www.who.int/docstore/water_sanitation_health/Globassessment/GlobalTOC.htm